

**No. 14668. Multilateral**

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER 1966 [*United Nations, Treaty Series, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION UNDER ARTICLE 4 (3)\*

**Chile**

*Notification deposited with the Secretary-General of the United Nations: 1 March 2024*

*Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 1 March 2024*

\*No UNTS volume number has yet been determined for this record.

**N° 14668. Multilatéral**

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES. NEW YORK, 16 DÉCEMBRE 1966 [*Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, I-14668.*]

NOTIFICATION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 4\*

**Chili**

*Dépôt de la notification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : 1<sup>er</sup> mars 2024*

*Enregistrement auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies : d'office, 1<sup>er</sup> mars 2024*

\*Le numéro de volume RTNU n'a pas encore été établi pour ce dossier.

[ TEXT IN SPANISH – TEXTE EN ESPAGNOL ]

Nº 041/2024

La Misión Permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas saluda muy atentamente al señor Secretario General y, de conformidad lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene a bien informar lo siguiente:

Según fuera informado a US. mediante Nota Nº79/23/C, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República, por decreto supremo Nº189 de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, S.E. el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric Font, declaró Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío de la Región del Biobío. Dicho Estado de Excepción se encuentra vigente desde el 17 de mayo de 2022 y había sido prorrogado por períodos consecutivos de 15 días, tal como fue informado mediante la referida Nota Nº79/23/C; y las posteriores Notas Nº108/23 y Nº125/23.

Al respecto, cúmpleme informar a US. que, con posterioridad a la remisión de la Nota Nº125/23, el referido Estado de Excepción ha vuelto a ser prorrogado con el acuerdo del Congreso Nacional, a través de los decretos supremos Nº29 y Nº81, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del año 2024. Cabe señalar asimismo que el 16 de enero de 2024, se promulgó la Ley Nº21.654 "Modifica la carta fundamental en materia de prórrogas sucesivas del estado de excepción constitucional de emergencia, en las condiciones que indica", la cual establece que, a contar de la sexta prórroga sucesiva del estado de excepción constitucional de emergencia, el Presidente de la República podrá prorrogarlo por periodos de 30 días, previo acuerdo con el Congreso Nacional. Ello es sin perjuicio de que los reportes sobre las medidas adoptas en el estado de excepción deban ser igualmente enviados al Congreso para su evaluación, cada 15 días. Asimismo, de conformidad con el artículo transitorio de la referida ley, si al publicarse la referida reforma constitucional se encontrare vigente la prórroga de un estado de excepción constitucional de emergencia, que hubiere sido ya prorrogado en más de seis oportunidades, se entenderá que dicha prórroga regirá por treinta días. En consecuencia, las prórrogas establecidas mediante los ya referidos decretos supremos Nº29 y Nº81 extendieron el periodo del estado de excepción por plazos consecutivos de 30 días, a contar del vencimiento del período previsto en las prórrogas anteriores, es decir, hasta el 7 de marzo de 2024.

Como fue señalado en las anteriores notas, la renovación del Estado de Excepción obedece a la continuación de los actos de violencia en las rutas de dichas zonas, lo que ha alterado el orden público, afectado la vida e integridad física de las personas y su libre tránsito, obstaculizando también las cadenas de suministro. Asimismo, estos conflictos han dificultado la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad en dichas regiones. De este modo, el Estado de Excepción ha sido dispuesto para la protección de la vida de las personas, además del libre tránsito y seguridad de las rutas de rutas en aquellos territorios.

Asimismo, como ya fue informado, de conformidad con la regulación constitucional vigente, el establecimiento de los Estados de Excepción Constitucional permite la restricción y suspensión de garantías previstas en la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por nuestro país, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consecuencia, durante la vigencia del referido Estado de Excepción Constitucional, los derechos a la libertad de circulación y de reunión, previstos en los artículos 12 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son susceptibles de suspensión.

Ahora bien, cabe destacar que por expresa disposición constitucional (artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°26, 20, 21 y 45 de la Constitución Política de la República), las garantías que no sean expresamente suspendidas o restringidas en el referido Estado de Excepción siguen resguardadas. En efecto, su respeto y promoción sigue siendo deber de los órganos del Estado, y las actuaciones del Ejecutivo siguen sujetas a controles y contrapesos de los demás poderes del Estado, cuyo funcionamiento no resulta en modo alguno alterado por estas medidas.

A su vez, la ley N°18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción permite al Presidente de la República delegar sus facultades —total o parcialmente—, a los Comandantes en Jefe de las Unidades de las Fuerzas Armadas. Por ello, el decreto que establece el referido Estado de Excepción Constitucional y sus renovaciones contienen también la designación de los respectivos Jefes de Defensa Nacional, toda vez que son ellos los autorizados para establecer las restricciones que permite la Constitución y la ley.

Finalmente, es importante destacar que el Estado de Chile tiene un compromiso irrestricto con la democracia, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, como pilares fundamentales de la convivencia social. Las restricciones a la libertad de circulación y reunión que pueden ser establecidas en el marco del referido Estado de

Excepción Constitucional se ajustan plenamente a las obligaciones internacionales de Chile, dado que se limitan al mínimo indispensable para proteger la vida e integridad física de las personas afectadas por situaciones de alteración del orden público. En consecuencia, las referidas restricciones serán levantadas tan pronto se supere esta situación, cuestión que será informada debidamente.

Atendido lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Misión Permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas informa al señor Secretario General sobre la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en las zonas indicadas, a fin de que se informe a los demás Estados Parte.

La Misión Permanente de Chile aprovecha esta oportunidad para expresarle al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas las seguridades de su más alta y distinguida consideración.



Nueva York, 1 de marzo de 2024

[TRANSLATION – TRADUCTION]

No. 041/2024

The Permanent Mission of Chile to the United Nations presents its compliments to the Secretary-General and, in accordance with the provisions of article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, has the honour to provide the following information:

As previously reported by means of note No. 79/23/C, the President of the Republic,

Mr. Gabriel Boric Font, in accordance with article 42 of the Political Constitution of the Republic, declared a constitutional state of emergency in the Araucanía Region and in the Arauco and Biobío Provinces of the Biobío Region, by Supreme Decree No. 189 of 2022, issued by the Ministry of the Interior and Public Security. That state of emergency has been in force since 17 May 2022 and was extended for consecutive periods of 15 days, as previously reported in the aforementioned note No. 79/23/C and in subsequent notes Nos. 108/23 and 125/23.

In that regard, please be informed that, following the dispatch of note No. 125/23, the aforementioned state of emergency has again been extended with the agreement of the National Congress through Supreme Decrees Nos. 29 and 81, both issued by the Ministry of the Interior and Public Security in 2024. It should also be noted that, on 16 January 2024, Act No. 21.654 “Amending the fundamental charter regarding successive extensions of the constitutional state of emergency, under the conditions stipulated” was enacted. This Act establishes that, from the sixth successive extension of the constitutional state of emergency, the President of the Republic may extend constitutional states of emergency for periods of 30 days, subject to prior agreement with the National Congress. This is without prejudice to the fact that reports on the measures adopted during states of emergency must also be sent to Congress for evaluation every 15 days. Furthermore, pursuant to the transitional article of that Act, if, upon publication of the aforementioned constitutional amendment, the extension of a constitutional state of emergency that has already been extended more than six times is in effect, it shall be understood that such an extension will be in effect for 30 days. Consequently, the extensions established by the aforementioned Supreme Decrees Nos. 29 and 81 extended the period of the state of emergency for consecutive periods of 30 days from the expiration of the period provided for in the previous extensions, that is, until 7 March 2024.

As indicated in the previous notes, the renewal of the state of emergency is in response to continued acts of violence on the roads in those areas, which have disturbed the public order and affected the life, physical integrity and freedom of movement of persons, as well as disrupting supply chains. Moreover, these conflicts have hindered the implementation of development projects, thereby perpetuating conditions of poverty and inequity in those regions. The state of emergency has therefore been established to protect human life, in addition to freedom of movement and the security of roads in those territories.

Furthermore, as previously mentioned, in accordance with the existing constitutional rules, the rights safeguarded in the Political Constitution of the Republic and in the international treaties ratified by Chile, including the International Covenant on Civil and Political Rights, may be restricted or suspended when constitutional states of emergency are established. Consequently, while the aforementioned constitutional state of emergency is in force, the right to liberty of movement and the right of assembly, as provided for in articles 12 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights, may be suspended.

However, by express provision of the Political Constitution of the Republic (articles 1, 5, 6, 7, 19 paragraph 26, 20, 21 and 45 thereof), rights that are not expressly suspended or restricted by the aforementioned state of emergency continue to be safeguarded. The respect for and promotion of those rights remain the duty of State bodies and the actions of the executive branch remain subject to the checks and balances of the other branches of the State, whose functioning is in no way altered by these measures.

The Constitutional Organic Act (Act No. 18.415) concerning states of emergency allows the President of the Republic to delegate his powers – in full or in part – to the commanders-in-chief of the various units of the Armed Forces. For that reason, the decree establishing the aforementioned constitutional state of emergency and the renewals thereof also provide for the appointment of the respective defence chiefs, since it is they who are authorized to establish the restrictions permitted by the Constitution and the Act.

Lastly, it is important to underscore the steadfast commitment of Chile to democracy, the rule of law and the defence of human rights, as key pillars of social coexistence. The restrictions on freedom of movement and the right of assembly that may be established under the aforementioned constitutional state of emergency are fully in line with the international obligations of Chile, given that they are limited to what is strictly necessary to protect the life and physical integrity of persons affected by disturbances to public order. Consequently, those restrictions will be lifted as soon as this situation is resolved, which will be duly communicated.

Given the above, and in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the Permanent Mission of Chile to the United Nations hereby informs the Secretary-General of the extension of the constitutional state of emergency in the areas indicated, in order for him to inform the other States Parties thereof.

The Permanent Mission of Chile takes this opportunity to convey to the Secretary-General of the United Nations the assurances of its highest consideration.

New York, 1 March 2024

[TRANSLATION – TRADUCTION]

(Traduction) (Original : espagnol)

N° 041/2024

La Mission permanente du Chili auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général et, conformément à l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'honneur de l'informer de ce qui suit :

Comme indiqué dans la note n° 79/23/C, en vertu des dispositions de l'article 42 de la Constitution politique de la République et par le décret suprême n°189 (2022) du Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, le Président de la République, Monsieur Gabriel Boric Font, a déclaré l'état d'exception constitutionnel d'urgence dans la région de l'Araucanie et les provinces d'Arauco et de Biobío (région de Biobío). Cet état d'exception, en vigueur depuis le 17 mai 2022, a été prolongé pour plusieurs périodes successives de 15 jours, comme précédemment communiqué par la note susmentionnée, ainsi que par les notes n°s 108/23 et 125/23 qui ont suivi.

À cet égard, il convient d'ajouter que, après l'envoi de la note n° 125/23, l'état d'exception a été prolongé une nouvelle fois avec l'accord du Congrès national, par les décrets suprêmes n°s 29 et 81, tous deux du Ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et en date de 2024. Il convient également de signaler que, le 16 janvier 2024, a été promulguée la loi n° 21.654, qui modifie la Constitution en ce qui concerne les prolongations successives de l'état d'exception constitutionnel d'urgence et dans laquelle il est prévu qu'à partir de la sixième prolongation successive de cet état d'exception, le Président de la République peut le prolonger pour des périodes de 30 jours, sous réserve de l'accord préalable du Congrès national et étant entendu que les rapports sur les mesures prises pendant ces périodes devront également être envoyés tous les 15 jours au Congrès pour examen. En outre, l'article transitoire de la loi n° 21.654 dispose que si un état d'urgence déjà prolongé à plus de six reprises est en cours de prolongation au moment de la publication de ladite loi, cette prolongation sera en vigueur pendant trente jours. Il en résulte que les prolongations établies par les décrets suprêmes n°s 29 et 81 ont prolongé la durée de l'état d'exception pour des périodes consécutives de 30 jours à compter de l'expiration de la période prévue dans les prolongations précédentes, c'est-à-dire jusqu'au 7 mars 2024.

Comme indiqué dans les notes antérieures, le maintien de l'état d'exception se justifie par la poursuite des actes de violence sur les axes de communication des régions mentionnées, violences qui portent atteinte à l'ordre public et menacent la vie et l'intégrité physique des personnes, dont elles entravent la libre circulation ainsi que celle des marchandises, perturbant les chaînes d'approvisionnement. Ces troubles font également obstacle à la mise en œuvre de projets de développement, perpétuant les conditions de pauvreté et d'inégalité dans ces régions. L'état d'exception a donc été décrété pour protéger la vie des personnes, ainsi que pour assurer la liberté de circulation et la sûreté de la voie publique dans les territoires visés.

Comme vous le savez, selon les règles constitutionnelles en vigueur, l'instauration des états d'exception constitutionnels permet de restreindre et de suspendre des garanties prévues dans la Constitution politique de la République et les traités internationaux ratifiés par notre pays, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par conséquent, tant que durera l'état d'exception d'urgence, les droits à la liberté de circulation et à la liberté de réunion, prévus aux articles 12 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pourront être suspendus.

Toutefois, en vertu de dispositions constitutionnelles expresses (articles 1, 5, 6, 7, 19 paragraphe 26, 20, 21 et 45 de la Constitution politique de la République), les garanties qui ne sont pas expressément suspendues ou restreintes dans le cadre de l'état

d'exception restent en vigueur. Leur respect et leur promotion continuent de s'imposer aux organes de l'État et l'action de l'exécutif reste soumise aux mécanismes de contrôle et d'équilibre des autres pouvoirs de l'État, dont le fonctionnement n'est en rien affaibli par ces mesures.

Par ailleurs, la loi organique constitutionnelle n° 18.415 relative aux états d'exception permet au Président de la République de déléguer ses pouvoirs, en tout ou en partie, aux commandants en chef des unités des forces armées. Par conséquent, le décret établissant l'état d'exception constitutionnel dans les régions mentionnées et ceux qui le prolongent portent également désignation des militaires chargés de la défense nationale dans ces régions, ceux-ci étant les personnes habilitées à y appliquer les restrictions autorisées par la Constitution et par la loi.

Enfin, il importe de souligner que l'État chilien est pleinement attaché à la démocratie, à l'état de droit et à la défense des droits humains, piliers fondamentaux de la coexistence sociale. Les restrictions à la liberté de circulation et de réunion qui peuvent être imposées dans le cadre de l'état d'exception constitutionnel en vigueur sont pleinement conformes aux obligations internationales du Chili en ce qu'elles se limitent aux seules mesures strictement nécessaires pour protéger la vie et l'intégrité physique des personnes exposées à des troubles à l'ordre public. Elles seront levées dès que cette situation aura pris fin, ce qui sera dûment notifié.

Compte tenu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Mission permanente du Chili auprès de l'Organisation des Nations Unies signale au Secrétaire général que l'état d'exception constitutionnel d'urgence a été prolongé dans les régions indiquées, afin que les autres États parties en soient informés.

La Mission permanente du Chili auprès de l'Organisation des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire général de l'Organisation les assurances de sa très haute considération.

New York, le 1<sup>er</sup> mars 2024